



Convención sobre los Derechos del Niño

Distr. general
4 de julio de 2019
Español
Original: inglés
Español, francés e inglés
únicamente

Comité de los Derechos del Niño

82º período de sesiones

9 a 27 de septiembre de 2019

Tema 4 del programa provisional

Examen de los informes presentados por los Estados partes

Lista de cuestiones relativa a los informes periódicos quinto y sexto combinados de Australia

Adición

Respuestas de Australia a la lista de cuestiones* **

[Fecha de recepción: 28 de junio de 2019]

* La versión original del presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial.

** La parte III del presente documento puede consultarse en los archivos de la Secretaría. También está disponible en la página web del Comité.

GE.19-11325 (S) 070819 080819



* 1 9 1 1 3 2 5 *

Se ruega reciclar



Parte I

Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones

1. Los gobiernos de los estados y territorios son los encargados de la ejecución de muchos de los programas y servicios por los que se da cumplimiento a las obligaciones asumidas por Australia en virtud de la Convención, en particular en relación con cuestiones como la educación, la salud, la justicia juvenil y la protección de los niños. Habida cuenta de esta circunstancia, Australia no cuenta con una ley integral sobre los derechos del niño a nivel nacional.

2. En toda legislación que se introduzca en el Parlamento australiano se debe evaluar la compatibilidad con los derechos y las libertades consagrados en los siete tratados internacionales fundamentales de derechos humanos ratificados por Australia. Ello incluye valorar si las leyes son compatibles con los derechos especiales de que gozan los niños debido a su condición de tales. El Ministerio de Justicia proporciona material de orientación y apoyo a los funcionarios del Gobierno de Australia para ayudarles a determinar si la legislación incorpora o limita los derechos del niño. En las declaraciones de compatibilidad se expone el punto de vista del autor de la propuesta (por lo general, el ministro competente) sobre la compatibilidad de la legislación con los derechos humanos y se ayuda a garantizar que estos derechos se tengan en cuenta en el proceso de formulación de políticas. Tales declaraciones son a su vez un instrumento esencial para sustentar la propia evaluación y presentación de informes del Comité Parlamentario Mixto de Derechos Humanos sobre la compatibilidad de la legislación con los derechos humanos. Como ejemplo reciente cabe mencionar el examen realizado por el Comité Parlamentario del proyecto de ley del plan federal de reparaciones por abuso sexual de niños en instituciones, de 2018, en que se analizó si ese proyecto era compatible con el interés superior del niño, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a la igualdad y a la no discriminación¹. Estos mecanismos contribuyen a garantizar que los parlamentarios estén debidamente informados sobre las repercusiones de la legislación propuesta desde la perspectiva de los derechos humanos.

3. Algunos estados y territorios disponen asimismo de un proceso para analizar la compatibilidad de los proyectos de ley con los derechos humanos. Por ejemplo, todo proyecto de ley que se presenta en la Asamblea Legislativa del Territorio del Norte debe estar acompañado de una declaración de compatibilidad y ser objeto de examen por un comité de control a fin de determinar si se ajusta a las normas de derechos humanos. Un ejemplo reciente es el proyecto de ley de enmienda de la ley sobre la atención y protección de los niños (2019), en que se tienen en cuenta los derechos consagrados en la Convención. Véanse más detalles sobre este proyecto de ley en la Parte II del presente documento.

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

4. El sistema del Consejo Ministerial está formado por nueve consejos que presentan informes al Consejo de Gobiernos Australianos (CdGA). Así pues, el Consejo de Educación es un foro que permite coordinar las políticas estratégicas sobre la educación escolar, preescolar y superior a nivel nacional, y sirve de cauce para el intercambio de información y la utilización de los recursos, sobre una base de colaboración, a fin de abordar cuestiones de importancia nacional. Los demás consejos, si bien no limitan su enfoque a los asuntos relativos a los niños, ofrecen un foro en que se pueden abordar esas cuestiones a nivel nacional. Por ejemplo, el Consejo de Ministros de Justicia supervisa en ese momento la elaboración de un marco para el intercambio adecuado de información entre los sistemas que se ocupan del derecho de familia, la violencia familiar y la protección de la infancia, así como el estudio de opciones para la reforma de la legislación y la justicia a fin de combatir el abuso sexual infantil. El Consejo de Reforma sobre Discapacidad examina las cuestiones relativas a los niños con discapacidad, en particular en

¹ Informe 9 de 2018, <http://www.austlii.edu.au/au/other/AUPJCHR/2018/183.pdf>.

lo que respecta al Plan Nacional de Seguro por Discapacidad y la Estrategia Nacional sobre Discapacidad 2010-2020. Aunque oficialmente no se trata de un consejo integrante del CdGA, los Ministros de Servicios Comunitarios se reúnen anualmente para analizar las prioridades comunes, a saber, mejorar los resultados de la acogida de niños fuera de su hogar, invertir en la intervención temprana en favor de los niños y las familias y proteger a los niños y jóvenes contra los abusos.

5. A nivel nacional, la responsabilidad de los programas, servicios, prestaciones y pagos destinados a las familias y a los niños incumbe al Departamento de Servicios Sociales, bajo la supervisión del Viceministro de Infancia y Familia. El Departamento colabora estrechamente con los gobiernos y funcionarios de los estados y territorios en cuestiones relacionadas con la política de la infancia, por conducto de los Ministros de Servicios Comunitarios y el grupo de Secretarías de Infancia y Familia. También coopera con el sector no gubernamental en el examen de esas cuestiones, a través del Foro Nacional para la Protección de la Infancia de Australia. La Oficina de la Mujer trabaja con todos los departamentos del Gobierno, en particular el Departamento de Servicios Sociales, para promover la igualdad entre los géneros y mejorar la vida de las mujeres y las niñas australianas. Esta labor a menudo converge con los programas y las políticas de protección a la infancia. Por ejemplo, la Oficina citada colaboró con ese Departamento en relación con el Cuarto Plan de Acción 2019-2022, en el marco del Plan Nacional para Reducir la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos, 2010-2022 (Plan Nacional para Reducir la Violencia).

6. Los gobiernos de algunos estados y territorios han establecido oficinas y departamentos similares que se ocupan de las mujeres y los niños. Por ejemplo, la Oficina de la Mujer de Nueva Gales del Sur trabaja en todos los sectores del gobierno del estado para mejorar la vida de las mujeres y las niñas. La Estrategia de la Mujer de Nueva Gales del Sur, 2018-2022, se compone de cuatro planes de acción anuales que incluyen iniciativas para abordar los problemas de las niñas en el acceso a la educación y al desarrollo económico y para mejorar la salud, el bienestar y la participación.

7. Australia protege y promueve los derechos de los niños enunciados en la Convención y los Protocolos Facultativos, mediante leyes, políticas y programas a nivel nacional, estatal y territorial. El Comisionado Nacional para la Infancia y los órganos independientes que supervisan y defienden los derechos del niño a nivel de los estados y territorios también tienen en cuenta la Convención y los Protocolos Facultativos.

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

8. Cada año, el Gobierno de Australia y los gobiernos de los estados y territorios elaboran estados presupuestarios que explican el gasto público, lo que incluye el gasto gubernamental en programas y servicios para la infancia. En el apéndice A figura un desglose de los gastos del Gobierno de Australia por función principal y secundaria (como se indica en el estado presupuestario 5 para 2019-2020: Gastos e inversión neta de capital) del que se desprende que una gran proporción de los gastos del Gobierno se destina a programas con repercusiones en la infancia, por ejemplo, educación (7,3 %), salud (16,3 %) y seguridad social y bienestar social (36 %), que incluyen asistencia a las familias y a los niños. En los estados presupuestarios de cada cartera se ofrecen detalles adicionales sobre los gastos relativos a medidas y programas concretos. Por ejemplo, el Estado Presupuestario 2019-2020 de la Cartera del Departamento de Servicios Sociales indica los gastos del Gobierno de Australia en medidas como el Plan Nacional para Reducir la Violencia y en programas que apoyan a las familias con hijos a cargo. En lugar de evaluarse el impacto de todas las asignaciones presupuestarias para la infancia, se procede a un seguimiento y evaluación de algunas políticas específicas que afectan a los niños.

9. Cuando existen motivos concretos de preocupación en relación con el gasto público para la infancia, estos se abordan a través de medidas específicamente adaptadas. Por ejemplo, la Comisión Real sobre la Protección y Detención de Niños en el Territorio del Norte (Comisión Real del Territorio del Norte) llegó a la conclusión de que los acuerdos de financiación en ese Territorio parecen caracterizarse por una falta de coordinación entre los

gobiernos. En respuesta, el Gobierno de Australia solicitó a la Comisión de Productividad que emprendiera un estudio sobre el gasto público en el Territorio del Norte en el ámbito de los servicios para la infancia y la familia pertinentes a la prevención de riesgos para los niños. El informe final se presentará al Gobierno en abril de 2020.

10. En los párrafos 35 a 40 de los informes periódicos quinto y sexto combinados de Australia, presentados en virtud del artículo 44 de la Convención (informe combinado), se facilita información relativa a la recopilación de datos desglosados sobre los niños. El Gobierno de Australia está en proceso de restablecer la encuesta sobre el uso del tiempo, para reunir datos sobre las contribuciones de las mujeres a la economía, en particular, el trabajo no remunerado. La encuesta inicial se llevará a cabo en el período 2020-2021, seguida de una encuesta anual continua más pequeña que enriquecerá la base de datos empíricos a lo largo del tiempo. Ello permitirá medir adecuadamente el trabajo no remunerado de las mujeres cuando se ocupan del cuidado de otras personas y proporcionará una base de elementos fundamental para la elaboración de las políticas y los programas que afectan a las familias.

11. En 2017, la Comisión de Productividad presentó el informe de una investigación sobre la manera de mejorar la disponibilidad y el uso de los datos de los sectores público y privado. En respuesta a ese informe, el Gobierno de Australia acordó financiar un conjunto de reformas fundamentales, por un valor de 65 millones de dólares, en un período de cuatro años. Ello incluía la creación de un cargo de Comisionado Nacional para los Datos, a fin de apoyar un nuevo marco de intercambio y publicación de la información y un conjunto de leyes para racionalizar el intercambio y la publicación de datos, atendiendo a la prueba de la finalidad y en observancia de las salvaguardias adecuadas. La nueva legislación propuesta ayudará a los organismos del Gobierno de Australia a proteger y promover aún más los derechos de los niños mediante el intercambio de datos, y de este modo, mejorar la formulación de políticas sobre la base de datos empíricos, así como la coordinación y la prestación de servicios.

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

12. La legislación australiana contra la discriminación prohíbe la discriminación (directa e indirecta) sobre la base de la noción de atributos protegidos. Por ejemplo, la Ley contra la Discriminación por Discapacidad, de 1992 (Ley Federal) establece la ilegalidad de la discriminación directa e indirecta por discapacidad en los principales ámbitos de la vida pública. Desde 2013, la Ley contra la Discriminación Sexual de 1984 (Ley Federal) prohíbe la discriminación directa e indirecta por orientación sexual, identidad de género y condición de persona intersexual, además de los atributos que ya estaban protegidos, como sexo y embarazo.

13. La raza es un atributo protegido en toda la legislación australiana contra la discriminación. La religión también lo es en la mayoría de los estados y territorios. A nivel nacional, en virtud de la Ley sobre el Trabajo Equitativo de 2009, se prohíbe la discriminación en el empleo por motivos religiosos. En diciembre de 2018, el Gobierno de Australia se comprometió a presentar un proyecto de ley contra la discriminación religiosa, en virtud del cual se prohibiría la discriminación basada en las creencias o actividades religiosas en los ámbitos fundamentales de la vida pública.

14. Asimismo, el Gobierno de Australia estableció en 2005 las Normas de la Educación para Personas con Discapacidad, que se revisan cada cinco años (la última revisión tuvo lugar en 2015). El objetivo de las Normas es reconocer a los estudiantes con discapacidad, en la actualidad y en el futuro, el derecho a las mismas oportunidades de educación y capacitación de que gozan los estudiantes sin discapacidad. Ello incluye el derecho al acceso, servicios e instalaciones comparables y a participar en la educación y la capacitación sin trabas por discriminación, en particular las basadas en creencias estereotipadas acerca de las capacidades y las opciones de los estudiantes con discapacidad.

15. Los gobiernos australianos se han comprometido a promover la igualdad de género, en particular a través de la lucha contra los estereotipos de género y la violencia por motivos de género. El Plan Nacional para Reducir la Violencia destaca que la igualdad

beneficia a las mujeres y los hombres, así como a sus familias y comunidades, y se basa en el entendimiento de que la desigualdad entre los géneros es una causa subyacente de la violencia contra la mujer. El Gobierno de Australia financia la Encuesta nacional sobre las actitudes de la comunidad frente a la violencia contra la mujer, que se lleva a cabo cada cuatro años desde 2009. Su objetivo es evaluar las actitudes de la sociedad contemporánea frente a la violencia contra la mujer y las relaciones entre los géneros, y hacer un seguimiento de la evolución de esas actitudes dentro de la comunidad, especialmente entre los jóvenes. *Our Watch* es otra iniciativa destinada a orientar el cambio cultural, los comportamientos y los desequilibrios de poder que conducen a la violencia contra las mujeres y sus hijos. En particular, la campaña *Our Watch's The Line* propone que se cuestionen los estereotipos rígidos de género y se fomenten relaciones sanas y respetuosas entre los jóvenes. *Stop it at the Start*, la campaña nacional financiada por todos los gobiernos australianos para reducir la violencia contra las mujeres y sus hijos, tiene como objetivo ayudar a romper el ciclo de violencia incitando a los adultos a reflexionar sobre sus actitudes y a entablar conversaciones con los jóvenes de 10 a 17 años acerca de las relaciones respetuosas y la igualdad de género.

16. El Gobierno de Australia encargó el informe *Northern Territory Emergency Response (NTER): Evaluation Report 2011* (Respuesta de Emergencia para el Territorio del Norte: Informe de evaluación 2011), en que se examinó si las medidas aplicadas, tanto a nivel individual como colectivo, habían sido eficaces y exhaustivas y habían producido resultados mejores y sostenibles en materia de seguridad, salud, educación y empleo. La evaluación también tenía por objeto examinar los aspectos de la coordinación y la colaboración². El conjunto de disposiciones legislativas que se elaboró a continuación, a saber, la Ley para un Futuro más Sólido en el Territorio del Norte (*Stronger Futures in the Northern Territory Act*), de 2012, también fue objeto de un examen en 2016, en que se evaluó la eficacia de las medidas especiales, como la lucha contra el consumo excesivo de alcohol, la reforma agraria y la seguridad alimentaria (principalmente la concesión de licencias a tiendas de la comunidad) y se determinó que durante los primeros tres años de vigencia, los resultados obtenidos con la Ley fueron en gran medida eficaces³.

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

17. En los párrafos 115 a 119 del informe combinado se facilita información sobre la prohibición de los castigos corporales en Australia. El castigo razonable (o corrección lícita) sigue siendo un medio de defensa que un progenitor puede invocar en caso de que se lo acuse de haber atentado contra la integridad física de un niño, en virtud del *common law* australiano y la legislación de algunos estados y territorios. Todos los gobiernos de Australia apoyan a las familias para que adopten estrategias de crianza positivas y mejoren la seguridad y el bienestar de los niños a través del Marco Nacional para la Protección de los Niños de Australia, 2009-2020. Este marco complementa la labor realizada por los estados y territorios mediante la prestación de servicios integrados a las familias, a cargo de profesionales especializados en asistencia familiar y primera infancia.

18. Cada año, el Gobierno de Australia invierte alrededor de 260 millones de dólares en programas de intervención y prevención para la crianza de los hijos y la primera infancia, que tienen por objeto fomentar la capacidad de los padres y dismantelar las pautas arraigadas de desventaja que afectan a los niños vulnerables y sus familias. Los servicios tratan activamente de identificar las cuestiones que tienen o podrían tener consecuencias en los resultados que se obtengan para el niño o la familia y proponen intervenciones o la remisión del caso a los servicios adecuados, antes de que esos problemas se agraven. La Red para la Crianza de Niños (*The Raising Children Network*) ofrece a los padres y personas que asumen el cuidado de niños amplia información y recursos en línea sobre el desarrollo de los niños y las aptitudes para la crianza; esa información y recursos están

² <https://www.indigenousjustice.gov.au/wp-content/uploads/mp/files/resources/files/2011-nter-evaluation-report-2011.v1.PDF>.

³ <https://www.pmc.gov.au/sites/default/files/publications/stronger-futures-northern-territory-print-version.pdf>.

actualizados, tienen una base empírica y están validados por los círculos científicos (raisingchildren.net.au).

19. La Estrategia Nacional de Sensibilización de la Comunidad es una iniciativa en el marco de la Estrategia 1 del Tercer Plan de Acción del Marco Nacional para la Protección de los Niños. La iniciativa promoverá la idea de la crianza de los hijos como una aptitud que se aprende, normalizará las conductas de búsqueda de ayuda para las familias y fomentará prácticas sólidas de crianza que contribuyan a establecer entornos seguros y de apoyo en los primeros años de la vida del niño. Otra iniciativa dentro del ámbito de la Estrategia 1 del Tercer Plan de Acción se refiere al apoyo a la investigación que se lleva a cabo en el marco del proyecto *First 1000 Days Australia* (Los primeros 1.000 días-Australia), que dirige la Universidad de Melbourne, y la puesta en marcha del programa *Connected Beginnings. First 1000 Days Australia* tiene como objetivo fortalecer a las familias indígenas para que puedan atender a las necesidades de sus hijos desde antes de la concepción hasta los 2 años de edad. *Connected Beginnings* integra los servicios a la primera infancia, la salud materno-infantil y el apoyo a la familia, en escuelas situadas en algunas comunidades indígenas afectadas por una situación de desventaja.

20. Si bien los programas varían en función de las jurisdicciones, los gobiernos de todos los estados y territorios ofrecen capacitación sobre enfoques positivos de la enseñanza y gestión del comportamiento a las personas que trabajan con niños en centros de atención y educación.

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

21. En Australia, una serie de medidas abordan los casos de maltrato y descuido de niños y la violencia familiar. En los párrafos 28 a 30, 120 a 126, 155 a 158, 315 a 318 y 324 y 325 del informe combinado (y en la respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones y en la Parte II del presente documento) se brinda información sobre el Marco Nacional para la Protección de los Niños, el Plan Nacional para Reducir la Violencia contra la Mujer y sus Hijos y la Comisión Real sobre las Respuestas Institucionales a los Abusos Sexuales de Niños (Comisión Real).

22. Atendiendo a las solicitudes de la Comisión Real sobre las Respuestas Institucionales a los Abusos Sexuales de Niños, el Gobierno de Australia creó la Oficina Nacional de Seguridad del Niño para dirigir la elaboración y la aplicación de una serie de iniciativas nacionales, entre ellas los Principios Nacionales para la Seguridad de los Niños en las Instituciones (Principios Nacionales), el Marco Federal para la Seguridad del Niño y la Estrategia Nacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. La Oficina Nacional de Seguridad del Niño depende del Primer Ministro de Australia y tiene su sede en el Departamento del Primer Ministro y el Gabinete.

23. Los Principios Nacionales nacieron por iniciativa de los Ministros de Servicios Comunitarios de todo el territorio de Australia; fueron mejorados por el Comisionado Nacional para la Infancia mediante un proceso de consulta nacional con grupos de promoción, círculos académicos y niños y jóvenes, y aprobados por el CdGA. Tales Principios ofrecen un enfoque coherente a nivel nacional destinado a favorecer las culturas institucionales que fomentan la seguridad y el bienestar de los niños en todos los sectores de Australia. La promoción de los Principios Nacionales también constituye una prioridad para mejorar la capacidad de las organizaciones de proteger a los niños y jóvenes del maltrato, objetivo que forma parte del Cuarto Plan de Acción 2018-2020 dentro del Marco Nacional para la Protección de los Niños (véase más información más adelante).

24. La Oficina Nacional de Seguridad del Niño también apoya la aplicación de las disposiciones del Gobierno de Australia en materia de seguridad infantil en el Marco Federal para la Seguridad del Niño, que establece normas mínimas para crear e integrar una cultura y una práctica que prioricen la seguridad del niño en las entidades gubernamentales australianas; se solicita a esas entidades:

- La realización de evaluaciones anuales de riesgos y el establecimiento de estrategias adecuadas para gestionar los riesgos identificados.

- El establecimiento y mantenimiento de un sistema de formación y cumplimiento destinado a que el personal conozca y observe el Marco Federal para la Seguridad del Niño y la legislación pertinente, en particular, los requisitos de controles del trabajo con niños y de presentación obligatoria de informes.
- La aprobación y aplicación de los Principios Nacionales antes del 1 de febrero de 2020.

25. El Marco Federal para la Seguridad del Niño también recomienda que las entidades apliquen los requisitos para la seguridad infantil a las personas u organizaciones a las que prestan financiación en relación con actividades en que participan niños.

26. La Oficina Nacional de Seguridad del Niño supervisa la concepción y aplicación de la Estrategia Nacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, que abarcará una gama de iniciativas con especial hincapié en el cambio cultural, en particular mediante la educación y actividades de sensibilización y medidas para ofrecer a los niños víctimas de abusos sexuales acceso al apoyo adecuado en el momento adecuado. Asimismo, prestará especial atención a las necesidades de las comunidades indígenas, las comunidades diversas desde el punto de vista cultural y lingüístico, las personas con discapacidad y las comunidades rurales y apartadas. La Oficina ha concluido las consultas iniciales con los niños supervivientes de abuso sexual y las organizaciones que los apoyan, las instituciones académicas, los profesionales clínicos, los especialistas en la protección de la infancia y los encargados de hacer cumplir la ley.

27. El 30 de marzo de 2019, el Gobierno de Australia comprometió 22,5 millones de dólares para establecer un Centro Nacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, con el objeto de ayudar a garantizar la seguridad de los niños y los jóvenes en el futuro, de acuerdo con la recomendación de la Comisión Real. El Centro Nacional apunta a prevenir el abuso sexual infantil, reducir la estigmatización asociada y aumentar la conciencia y la comprensión de las consecuencias de esos abusos. Asimismo, utilizará un enfoque estratégico a nivel nacional a fin de investigar y mejorar la capacidad de los servicios para atender eficazmente a los niños supervivientes de abusos sexuales, reducir la reincidencia de los autores y ayudar a prevenir esos abusos en el futuro.

28. El 22 de octubre de 2018, el Primer Ministro de Australia, el excelentísimo señor Scott Morrison, Miembro del Parlamento, presentó una disculpa nacional a las víctimas y supervivientes de abuso sexual de niños en instituciones. En julio de 2018 entró en vigencia el Plan Nacional de Reparaciones para las personas que han sufrido abuso sexual infantil a nivel institucional. En la Parte II se proporciona más información al respecto.

29. El Cuarto Plan de Acción 2018-2020 en el Marco Nacional para la Protección de los Niños abarca cuatro prioridades fundamentales:

1. Lograr mejores resultados en relación con los niños indígenas en riesgo de entrar en el sistema de protección de la infancia o que han estado en contacto con el sistema;
2. Mejorar la prevención y la intervención temprana mediante la planificación conjunta de los servicios y la inversión;
3. Lograr mejores resultados en relación con todos los niños separados de sus hogares, favoreciendo una situación estable mediante la reunificación con la familia y otras opciones permanentes para su cuidado;
4. Mejorar la capacidad de las organizaciones y los gobiernos para proteger a los niños y los jóvenes del abuso, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión Real.

30. El Gobierno de Australia dirige actualmente la elaboración del Cuarto Plan de Acción 2019-2022 en el marco del Plan Nacional para Reducir la Violencia, en colaboración con los gobiernos de los estados y territorios. El 5 de marzo de 2019, el Gobierno Nacional anunció un conjunto de medidas por un valor de 328 millones de dólares, destinadas a reducir la violencia contra las mujeres y los niños. Ese conjunto incluye 68 millones de dólares para iniciativas de prevención encaminadas a detener la violencia doméstica, familiar y sexual y a continuar cambiando las actitudes y

consideraciones que pueden conducir a la violencia. Ello abarca iniciativas de prevención específicas para asistir a los pueblos indígenas, a las comunidades diversas desde el punto de vista cultural y lingüístico y a las personas con discapacidad. Entre las medidas figura una financiación adicional para mejorar y desarrollar los sistemas encargados de proteger la seguridad de las mujeres y los niños, en particular mediante la formación de los trabajadores de la salud y el personal auxiliar sanitario, para que sepan identificar y apoyar mejor a las víctimas de la violencia doméstica, y la elaboración de normas nacionales para reaccionar ante la violencia sexual.

31. El Cuarto Plan de Acción se ha elaborado en consulta con una gran variedad de interesados y se ha basado en los comentarios de más de 600 personas y 400 organizaciones, así como en pruebas y datos recopilados a través del Tercer Plan de Acción. El Cuarto Plan consolidará las medidas aplicadas hasta la fecha y proporcionará una plataforma para las futuras orientaciones normativas encaminadas a reducir la violencia doméstica, familiar y sexual una vez concluida la vigencia del Plan Nacional para Reducir la Violencia.

32. La señora June Oscar, Comisionada de Justicia Social en favor de los Aborígenes y los Isleños del Estrecho de Torres, ha entablado consultas nacionales como parte del proyecto *Wiyi Yani U Thangani* (Voces de Mujeres). A mediados de 2019 se presentará al Gobierno de Australia un informe final con recomendaciones para mejorar la seguridad comunitaria y personal de las mujeres y niñas indígenas, lo que incluye un cambio hacia modelos de servicio centrados en la prevención y el apoyo, más que en la gestión de crisis.

33. El Gobierno de Australia ha anunciado la creación de una Comisión Real para examinar la violencia, el maltrato, el descuido y la explotación de las personas con discapacidad, en particular los niños con discapacidad. Se prevé que la Comisión Real elabore un informe provisional para octubre de 2020; el informe definitivo se presentará para fines de abril de 2022.

34. En los párrafos 67 a 69, 313 y 314 y en la página 206 de los apéndices del informe combinado se brinda información sobre el matrimonio de niños. En el ejercicio económico 2017/18, la Policía Federal Australiana recibió 61 denuncias relacionadas con matrimonios forzados, en la mayoría de los casos, de personas menores de edad.

35. El Gobierno de Australia ofrece hasta 200 días de apoyo integral a las víctimas de matrimonios forzados a través del Programa de Asistencia a las Víctimas de la Trata (véase más información en el párrafo 13 de la lista de cuestiones y en la Parte II). Para tener acceso a este apoyo, no es necesario que las víctimas contribuyan a una investigación o enjuiciamiento penal. Al 1 de abril de 2019, se habían remitido al Programa de Asistencia los casos de 14 personas menores de 18 años que habían contraído un matrimonio forzado o en riesgo de ser obligadas a hacerlo, durante el ejercicio económico 2018/19.

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

36. La protección de la seguridad de los niños y las familias constituye una prioridad para todos los gobiernos australianos. Los estados y territorios son responsables de la gestión y la financiación de la protección legal del niño, la atención de los niños separados de sus familias y los servicios de apoyo a la familia. Estos servicios están a cargo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en todas las jurisdicciones. A nivel nacional se han potenciado los enfoques orientados a desarrollar los servicios de intervención temprana y a evitar que las familias queden sujetas al sistema de protección legal del niño. La mayoría de las jurisdicciones ha invertido en nuevos y mejores modelos de apoyo intensivo a las familias. El denominador común en estas iniciativas es la armonización de la labor de los servicios contra la violencia familiar y doméstica con las medidas de apoyo a la familia y la protección de los niños.

37. Por ejemplo, como parte de la reforma de los servicios de seguridad del niño en el marco de la iniciativa *Strong Families, Safe Kids* (Familias sólidas, niños seguros) en 2016, el gobierno de Tasmania se comprometió a desarrollar un servicio de apoyo intensivo para las familias en riesgo inminente de quedar sujetas al sistema de protección de la infancia.

En 2017-2018 se puso a prueba un Servicio Intensivo de Colaboración con las Familias, en virtud del cual 50 familias expuestas a alto riesgo recibieron un apoyo específico de hasta 20 horas por semana durante un período de tres a cinco meses. Este apoyo consistió en presentar modelos basados en la experiencia para mejorar el comportamiento de los padres en la crianza de los hijos, asistencia práctica y modelización de roles. Una evaluación externa e independiente de la prueba, realizada por la Universidad de Tasmania, determinó que el programa daba resultados positivos para las familias y formuló una serie de recomendaciones sobre la forma de mejorar el servicio. El gobierno de Tasmania ha invertido 7,5 millones de dólares durante tres años para prorrogar las prestaciones del Servicio hasta 2020-2021. El gobierno de Victoria también ha esbozado una estrategia para reformar el sistema de servicios para niños, jóvenes y familias en Victoria, titulada *Roadmap for Reform: Strong Families, Safe Children* (Hoja de ruta de la reforma: Familias sólidas, niños seguros). Esta estrategia intenta cambiar el sistema de servicios para niños y familias y pasar del modelo “respuesta a las crisis” al de “intervención y prevención tempranas”. A este fin se crearán servicios coordinados que trabajarán juntos para atender a las necesidades de las familias y de los niños vulnerables.

38. Los gobiernos australianos se han comprometido a lograr progresos importantes y sostenidos en lo que se refiere a disminuir el número excesivo de niños indígenas separados de sus familias y acogidos en instituciones. Como se ha señalado antes, la primera prioridad del Cuarto Plan de Acción del Marco Nacional para la Protección de los Niños es mejorar los resultados que se obtienen con los niños pertenecientes a las comunidades indígenas que están en riesgo de ingresar en instituciones de protección de la infancia o que ya han estado en contacto con el sistema. Como parte de esta prioridad, todos los gobiernos se han comprometido a aplicar activamente la legislación, las políticas y/o las prácticas para garantizar el cumplimiento de los cinco elementos del Principio para el Acogimiento de Niños Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (prevención, asociación, acogimiento, participación y conexión). Ello incluye tratar de dar una mayor participación a los aborígenes en los procesos de adopción de decisiones relacionadas con los niños y las familias en riesgo de quedar sujetos a la competencia de los sistemas de protección de la infancia, y apoyar la inversión, la expansión y el desarrollo de las organizaciones controladas por las comunidades aborígenes para prestar servicios de apoyo a las familias y protección de los niños. Las consultas nacionales *Wiyi Yani U Thangani* (Voces de Mujeres), mencionadas en el párrafo 6 de la lista de cuestiones, también han puesto de relieve la necesidad de mejorar el enfoque para abordar las cuestiones relativas a la separación de los niños indígenas de sus hogares. El informe del Comisionado incluirá medidas para que todos los gobiernos mejoren las políticas relacionadas con los sistemas de protección de la infancia.

39. Los criterios para el acogimiento de un niño en una institución difieren de una jurisdicción a otra. En términos generales, los departamentos responsables de la protección de la infancia toman conocimiento de la situación de los niños y los jóvenes por conducto de informes que revelan preocupación por su situación. Estos informes pueden proceder de miembros de la comunidad, profesionales, organizaciones, los niños y sus familias. En todas las jurisdicciones, los servicios de protección de la infancia evalúan tales informes a fin de determinar si es necesario dar curso a nuevas medidas. En los casos en que se requiere una intervención suplementaria, el departamento pertinente del estado o del territorio puede solicitar al tribunal competente que dicte una orden de protección y acogimiento del niño en una institución. El grado de participación del departamento que se desprende de la orden de acogimiento y protección variará según el tipo de orden. La separación del niño de su familia y su acogimiento fuera de su hogar constituye el caso más extremo en la cadena de protección de la infancia establecida por la ley y se considera la intervención de último recurso luego de haberse agotado todas las demás opciones. Aunque existen disposiciones para que los padres acepten voluntariamente enviar a los niños a centros fuera del hogar familiar (como un remedio temporal), en la mayoría de los casos los niños son acogidos fuera del hogar familiar en virtud de una orden emitida por el tribunal competente.

40. En las páginas 77 a 79 de los apéndices se exponen las medidas establecidas para examinar periódicamente el acogimiento de un niño a fin de garantizar su seguridad y bienestar. Todos los estados y territorios ofrecen capacitación a las personas que trabajan en

la protección de la infancia, en particular los familiares y otras personas que aceptan acogerlos, y se impone a esas personas someterse a un control específico concebido para los que trabajan con niños. Por ejemplo, en el Territorio de la Capital de Australia, se imparte formación a los familiares y otras personas de hogares de acogida para que cuiden de los niños y jóvenes vulnerables centrandose su atención en los traumas; se les ofrece asimismo una formación continua en temas como primeros auxilios, nutrición y gestión de comportamientos.

41. Los gobiernos australianos se han comprometido a velar por que todos los niños tengan el mismo acceso a la educación, con independencia de sus circunstancias. Algunas jurisdicciones ofrecen una remuneración suplementaria a las personas que cuidan de jóvenes para que puedan permanecer con ellos mientras completan su educación. Otras también ofrecen apoyo adicional a los jóvenes que han estado en una institución del sistema de protección de la infancia, para ayudarles a completar la educación terciaria o la formación profesional. Por ejemplo, en Nueva Gales del Sur, los jóvenes que han estado al cuidado de familiares u otras personas que los han acogido pueden optar a la beca *Out-of-Home Care Pathways* (Itinerarios para jóvenes acogidos fuera del hogar), para ayudarles a obtener un título universitario. En Australia Occidental, los premios anuales *Achiever* brindan ayuda financiera a los jóvenes de 15 a 25 años que han sido acogidos fuera de su familia y siguen estudios y formación continua, ya sean estudios universitarios o formación, aprendizajes y pasantías acreditados con certificado.

42. En los párrafos 208 a 214 del informe combinado figura información sobre las iniciativas del Gobierno de Australia para respaldar la salud mental y el bienestar de los niños y los jóvenes. Además de los servicios de salud mental disponibles para todos los niños, los gobiernos de algunos estados y territorios prestan servicios de salud mental especializados para niños acogidos fuera de su familia. Por ejemplo, Melaleuca Place es un servicio especializado del Gobierno del Territorio de la Capital de Australia que proporciona servicios terapéuticos intensivos a niños, de 0 a 12 años, que han sido acogidos fuera de su familia y han sufrido traumas importantes a raíz de maltrato o descuido. Un equipo de profesionales trabaja en conjunto para ofrecer actividades de divulgación, evaluaciones e intervenciones multidisciplinarias para niños, a fin de facilitar su curación y recuperación y mejorar sus condiciones de vida.

43. Los gobiernos de los estados y territorios han adoptado medidas para asistir a los niños que salen de una institución del sistema de protección de la infancia y se encuentran en la transición a la vida adulta, por lo general con el apoyo de un asistente social que elabora y revisa periódicamente un plan de transición personalizado y determina el apoyo disponible. Por ejemplo, en Victoria, el programa *Home Stretch* extiende de 18 a 21 años la edad en que los jóvenes pueden recibir el apoyo que tanto necesitan, incluido el alojamiento.

44. Desde 2014, el Gobierno de Australia dedica todos los años 3,512 millones de dólares para sufragar el Subsidio para la Transición a la Vida Independiente, un pago único de 1.500 dólares que se ofrece a nivel nacional a los jóvenes que reúnen determinados criterios y se encuentran en la transición del sistema de acogida fuera del hogar a una vida independiente. Este subsidio está disponible para los jóvenes desde el momento en que salen de la institución (pueden aspirar al subsidio los jóvenes de 15 a 25 años de edad) para sufragar diversos bienes y servicios relacionados con su plan de independencia, expresado formalmente. La prueba titulada *Towards Independent Adulthood* (Hacia una edad adulta independiente) es una iniciativa del Tercer Plan de Acción del Marco Nacional para la Protección de los Niños que tiene como objeto mejorar el bienestar y los futuros resultados económicos y sociales de los jóvenes que pasan del sistema de acogida fuera del hogar a la edad adulta. Durante período de prueba, de tres años de duración, se ofrece tutoría individual y apoyo específico hasta a 80 jóvenes que aceptaron participar, a partir de los 16 años. El personal que trabaja con jóvenes ayuda a los participantes a adquirir aptitudes para la vida independiente y obtener acceso a la vivienda, la educación, la formación, el empleo y apoyo especializado y otros servicios. El período de prueba comenzó a mediados de 2017 y durará hasta junio de 2020. El objetivo es evaluar la eficacia de los servicios de apoyo integral para la transición de los jóvenes a la vida independiente a través de un

modelo de servicio intensivo de gestión de casos, acceso prioritario a los servicios financiados por el Gobierno y recursos en línea.

45. La Comisión Real sobre las Respuestas Institucionales a los Abusos Sexuales de Niños ha destacado la importancia de la seguridad de los niños en las instituciones. En el párrafo 6 de la lista de cuestiones más arriba se abordan las medidas adoptadas para garantizar mecanismos de presentación de denuncias e identificación de abusos contra los niños.

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

46. En los párrafos 180 a 186 del informe combinado figura información relativa a la Estrategia Nacional sobre Discapacidad y el Plan Nacional de Seguro de Discapacidad (PNSD). El segundo informe sobre los progresos realizados en el período 2015-2016 proporcionó una visión de todas las instancias de gobierno en relación con los resultados de la Estrategia Nacional sobre Discapacidad en estos ámbitos, en particular con información sobre las tendencias de los resultados. En ese momento se elabora el tercer informe sobre los progresos realizados en el período 2017-2018. Los hallazgos de los informes sobre los progresos de la Estrategia servirán de base para la elaboración de una nueva estrategia después de 2020.

47. El PNSD está a disposición de todos los australianos con discapacidad que reúnan los criterios de admisibilidad, particularmente el requisito de discapacidad o de necesidad de intervención temprana, como se establece en la Ley del Seguro Nacional de Discapacidad de 2013 en sus artículos 24 y 25. Los niños con discapacidades severas o profundas probablemente reunirán estos criterios de admisibilidad. En los casos de niños menores de 7 años, la Agencia Nacional del Seguro de Discapacidad colabora con asociados especializados en la primera infancia como primer punto de contacto de las familias, incluso para ayudarles a obtener acceso al PNSD. Este procedimiento se conoce como el enfoque de intervención temprana en la primera infancia. Está concebido para ayudar a todos los niños con atraso en el desarrollo o con discapacidad y a sus familias a lograr mejores resultados a largo plazo mediante servicios de apoyo apropiados en su comunidad local, independientemente de que se haya determinado un diagnóstico. Con arreglo a este enfoque, se ayuda a los niños que reúnen los criterios para estar cubiertos a elaborar su propio plan. Una vez que se ha aprobado el acceso al PNSD, el niño puede obtener el apoyo necesario que atienda a sus necesidades, al igual que otros participantes en el Plan. El enfoque de la intervención temprana se basa en la experiencia demostrada de las mejores prácticas. Está reconocido y sustentado por pediatras, profesionales afines de la salud, educadores y especialistas en la primera infancia de todo el mundo y se guía continuamente por los nuevos progresos en el desarrollo de la pediatría.

48. A través de los planes de los participantes, el PNSD también sufraga servicios que incluyen terapias afines, como la audiología o la podología, apoya a los niños con necesidades imperiosas y complejas para que puedan asistir a la escuela primaria y presta asistencia a los niños con problemas de conducta.

49. En las páginas 12 a 14 de los apéndices se ofrece información sobre las medidas para ayudar a los padres de niños con discapacidad. El 91 % de los padres y personas que cuidan a niños aún no escolarizados participantes en el PNSD opina que el programa fomentó la capacidad de los niños para comunicar lo que desean, en relación con el 87 % en su primer año de participación. El 69 % de los padres y personas que cuidan a niños en edad escolar menores de 14 años consideran que el niño adquirió más independencia en su segundo año de participación, en relación con el 54 % en el primer año.

50. En los párrafos 252 a 255 del informe combinado y en la página 147 de los apéndices figura información sobre las medidas destinadas a promover la educación inclusiva. En Australia, el número de personas de 19 a 25 años con discapacidad que terminan el 12º curso ha aumentado progresivamente, hasta alcanzar el 63 % en 2015. En 2016, se incorporó al plan de estudios de Australia el lenguaje de signos Auslan (*Australian Sign Language*). En ese plan se propone la utilización de Auslan desde el curso inicial (*Foundation*) hasta el décimo curso (*Year 10*), con el objetivo de desarrollar el

conocimiento, la comprensión y las aptitudes que permitan a los estudiantes comunicarse en este lenguaje.

51. En los párrafos 187 a 189 del informe combinado se facilita información sobre la esterilización de los niños con discapacidad.

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

52. Muchos australianos experimentan dificultades económicas en algún momento de su vida, pero en la mayoría de los casos, con carácter temporal. Entre 2015 y 2016, alrededor del 9 % de los australianos (2,2 millones de personas) se encontraron en situación de pobreza relativa por insuficiencia de ingresos (ingresos inferiores del 50 % de la media), y las tasas más altas de esa pobreza relativa se registraron entre los niños y las personas mayores. Las personas que viven en familias monoparentales, los desempleados, las personas con discapacidad y los australianos indígenas son más propensos a sufrir de la pobreza por insuficiencia de ingresos, privaciones y exclusión social. Los grupos que se encuentran en estas circunstancias corren un riesgo elevado de que la situación de desventaja económica se arraigue y limite sus posibilidades de aprovechar oportunidades económicas o desarrollar las aptitudes necesarias para superar su situación. Esos riesgos son especialmente altos para los niños que viven en hogares en que ninguno de sus miembros trabaja, grupo que sobresale entre las múltiples mediciones de la desigualdad y de la situación de desventaja⁴.

53. El Gobierno de Australia se ha comprometido a garantizar que los niños australianos tengan el mejor comienzo posible en la vida y propone una serie de prestaciones y pagos para ayudar a las familias a sufragar los costos de la crianza de los hijos y apoyar a los padres afectados por el desempleo. Por ejemplo, el Gobierno de Australia dedica alrededor de 18.000 millones de dólares anuales a sufragar la desgravación tributaria familiar, con lo que se ayuda a unos 2,7 millones de niños de familias de ingresos bajos y medios que cumplen con los requisitos necesarios. El Gobierno también ayuda a las personas y familias que reúnen los criterios de admisibilidad a hacer frente a las crisis financieras y conseguir el bienestar económico, como parte de la actividad destinada a fomentar el bienestar financiero y la capacidad. Los servicios son gratuitos, voluntarios y confidenciales, y generalmente están a cargo de organizaciones comunitarias.

54. En los párrafos 128 y 129 del informe combinado figura información sobre el programa para padres *Parents Next*, del Gobierno de Australia, cuyo objetivo es ayudar a romper el ciclo intergeneracional de dependencia de los servicios sociales y pobreza infantil, aumentar la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y contribuir a colmar la disparidad entre las personas indígenas y no indígenas en el ámbito del empleo. Desde el despliegue a nivel nacional en julio de 2018, según se menciona en el informe combinado, al 30 de abril de 2019, el programa ha ayudado a:

- Más de 86.000 padres que han participado en el programa.
- Más de 13.700 padres a recibir educación y formación.
- Casi 11.000 individuos a obtener un empleo.

55. El programa para padres *Parents Next* tiene dos vertientes, una selectiva y una intensiva. La vertiente intensiva presta el mismo apoyo que la vertiente selectiva, pero con una asistencia financiera adicional a los padres que reúnen los requisitos (como ayuda para la reubicación cuando se inicia un empleo y subsidios a los empleadores para el pago de sueldos) en 30 localidades con una alta tasa de personas que reciben pagos para la crianza de los hijos y/o que muestran una situación de desventaja más acentuada. Aproximadamente una quinta parte de los participantes del programa *Parents Next* son indígenas. A través del marco Cerrar la Brecha (*Closing the Gap*), todos los gobiernos australianos se han comprometido a prestar apoyo para obtener mejores resultados en las condiciones de vida de los australianos indígenas, particularmente los niños. Se

⁴ Véase *Rising inequality? A stocktake of the evidence*, documento de investigación de la Comisión de Productividad: <https://www.pc.gov.au/research/completed/rising-inequality>.

proporciona más información en la respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones, más adelante.

56. En los párrafos 295 a 301 del informe combinado figura información sobre los servicios para las personas sin hogar. El censo de 2016 arrojó la cifra de 25.827 niños y jóvenes (de 18 años o menos) sin techo, lo que constituye una disminución de aproximadamente el 9 % con respecto a 2011 (28.485). El número de niños (de 17 años o menos) que accedió a servicios especializados para personas sin hogar aumentó de 71.514 en 2011-2012 a 82.737 en 2017-2018. Esos servicios tienen como objetivo dar a los niños y a los jóvenes los medios más adecuados para salir de esa condición, en particular mediante la intervención temprana y la prevención, la asistencia para la reconciliación familiar y la gestión de casos para asegurar que los jóvenes continúen su educación y formación.

57. Los objetivos generales de la política australiana en materia de vivienda y personas sin hogar se esbozan en el Acuerdo Nacional sobre Vivienda y Personas sin Hogar suscrito entre el Gobierno de Australia y los gobiernos de los estados y territorios, que entró en vigencia el 1 de julio de 2018. Por conducto del Acuerdo, el Gobierno de Australia ofrece a los estados una financiación de aproximadamente 1.500 millones de dólares anuales para mejorar la asequibilidad de la vivienda y la situación de las personas sin hogar. El Acuerdo requiere que se pongan en marcha estrategias para conseguir la disponibilidad de viviendas públicas y soluciones para las personas sin hogar, dirigidas a seis cohortes prioritarias a nivel nacional, cinco de las cuales abarcan a los niños, a saber, mujeres y niños afectados por la violencia en la familia y en el hogar; niños y jóvenes; australianos indígenas; individuos que recaen reiteradamente en la condición de personas sin hogar y personas que salen de las instituciones y otras situaciones de acogida y no tienen donde vivir. A partir del 1 de julio de 2018, el Gobierno de Australia también aportará hasta 117 millones de dólares a lo largo de cinco años para el programa *Reconnect* (Vuelve a conectarte). *Reconnect* utiliza programas de prevención e intervención temprana basados en la comunidad para ayudar a los jóvenes de 12 a 18 años (o de 12 a 21 años para los jóvenes recién llegados) que no tienen hogar, o en riesgo de no tenerlo, y a sus familias. El gobierno de Victoria también invertirá 3 millones de dólares en 2019-2020 en un programa de subvenciones para servicios de ayuda a las personas sin hogar, con el fin de garantizar a jóvenes lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) de Victoria el acceso a servicios seguros e inclusivos en todo el sector de las personas sin hogar y apoyar programas que abordan las causas que llevan a las personas LGBTI a esa situación.

58. En el ámbito del derecho internacional, la Convención no llega a incluir un derecho general al medio ambiente o a la protección contra el cambio climático. Sin embargo, el Gobierno de Australia puede informar de que ha ratificado el Acuerdo de París y está empeñado en una acción internacional eficaz sobre el cambio climático.

Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones

59. El Gobierno de Australia no tiene por el momento la intención de establecer una entidad de tutela independiente para los niños inmigrantes no acompañados. De conformidad con las Normas Nacionales de Australia para el Cuidado de Personas Fuera del Hogar se aplica el Programa Humanitario para Niños No Acompañados. Estas normas cumplen con los requisitos de la Convención. En los párrafos 274 a 276 del informe combinado se ofrece más información sobre la tutela de los niños inmigrantes no acompañados.

60. El Gobierno de Australia no considera por el momento la posibilidad de prohibir la detención de niños en todas las circunstancias. Como se señala en los párrafos 278 a 281 del informe combinado, la detención de niños es siempre una medida de último recurso y los niños permanecen detenidos durante el menor tiempo posible y en centros alternativos de detención siempre que se pueda. Los niños solo son retenidos en centros de detención de inmigrantes o en centros alternativos de detención con propósitos muy limitados, principalmente debido al proceso de renovación en curso de los aeropuertos, su traslado por razones médicas o el hecho de encontrarse en las últimas etapas de su devolución a su país

de origen. Cuando el Ministerio del Interior procede a la detención administrativa de una familia, siempre que sea posible colocará juntos a los integrantes del grupo familiar. La prioridad es alojar a los niños y a sus familias en la forma menos restrictiva posible. Las personas que no están detenidas en virtud de acuerdos de tramitación regionales residen en centros abiertos o en albergues de la comunidad.

61. Se ha adoptado una serie de medidas de atención, bienestar y apoyo para solventar las necesidades de los niños reclusos en centros de detención de inmigrantes, o centros alternativos de detención, o residentes en la comunidad. Los proveedores de servicios contratados facilitan el acceso a los servicios de salud, educación, recreativos y culturales apropiados para cada edad. El acceso a servicios, programas y actividades se revisa regularmente para asegurar que se atiende a las necesidades individuales y se tienen en cuenta los riesgos para los niños.

62. Desde el 28 de febrero de 2019, no ha habido traslado de niños en los países de la región en que se tramitan los casos. En virtud de acuerdos de tramitación regionales en Nauru se ha trasladado temporalmente a Australia un total de 286 niños. Esos niños, junto con sus familiares, residen en el seno de la comunidad australiana en virtud de disposiciones para la determinación de residencia y tienen acceso a los servicios descritos anteriormente. De conformidad con la política del Gobierno de Australia, los niños y sus familias no se asentarán en Australia, y se les anima a estudiar opciones de migración a terceros países, incluido el reasentamiento en los Estados Unidos.

Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones

63. En las partes VII y VIII del informe combinado, Australia informó sobre los progresos realizados y las dificultades encontradas en la consecución de las metas del plan Cerrar la Brecha, 2008, en materia de salud y educación. El informe sobre el plan Cerrar la Brecha previsto en 2019 es el último informe que evaluará los progresos realizados en el contexto del marco de ese plan durante el período 2008-2018⁵.

64. El Gobierno de Australia se ha comprometido a establecer una verdadera asociación oficial para superar la situación de disparidad con los pueblos indígenas y compartir la adopción de decisiones en la elaboración, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de un marco renovado del plan Cerrar la Brecha, que es la estrategia nacional de Australia para hacer frente a las desigualdades en las condiciones de vida de los pueblos indígenas. En marzo de 2019 entró en vigor un acuerdo de asociación de diez años, en virtud del cual el CdGA establece un Consejo Conjunto sobre Cerrar la Brecha. Este Consejo Conjunto incluye ministros de todas las jurisdicciones, 12 miembros de la Coalición Nacional de Organizaciones Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres y un representante de la Asociación de Gobiernos Locales de Australia. Es el primer Consejo del CdGA que incluye a miembros de gobiernos externos como socios en pie de igualdad en la adopción de decisiones, y representa un paso histórico en la relación de trabajo entre el gobierno y los pueblos indígenas. En 2019, la labor del Consejo Conjunto permitirá ultimar el marco renovado y las metas del plan Cerrar la Brecha y revisar el Acuerdo Nacional de Reformas sobre los Aborígenes, de 2008, para someterlo a la aprobación por el CdGA. A continuación, desempeñará una función permanente en la supervisión de los resultados del marco y las metas acordadas conjuntamente, así como su cumplimiento. En diciembre de 2018, el CdGA publicó un proyecto de declaración sobre la renovación del plan, como base para finalizar ese proceso a través de la asociación formal; el documento incluía proyectos de metas en los ámbitos de la protección de la infancia, la seguridad de la familia, la vivienda, la salud, incluido el peso adecuado del niño al nacer, la mortalidad infantil, el rendimiento escolar y la reclusión de adultos y jóvenes.

65. El Departamento de Salud prepara la próxima versión del Plan de aplicación del Plan Nacional de Salud para Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres 2013-2023, cuya publicación está prevista para mediados de 2020, en colaboración con las partes interesadas

⁵ Gobierno de Australia, Departamento del Primer Ministro y Gabinete, *Closing the Gap Report 2019*, disponible en <https://ctgreport.pmc.gov.au/>.

indígenas que se encargan de la salud. Según la visión del Plan de Salud el sistema sanitario de Australia “está exento de racismo y desigualdad y todos los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres tienen acceso a servicios de salud eficaces, de alta calidad, adecuados y asequibles. Junto con las estrategias para abordar las desigualdades sociales y los factores determinantes de la salud, se ha establecido la plataforma necesaria para lograr la igualdad en materia de salud para el año 2031”. El Plan de aplicación estipula un conjunto de medidas que se ejecutarán para 2023, sobre cuestiones como los factores sociales y culturales determinantes de la salud, el acceso a servicios e información apropiados desde el punto de vista cultural y basados en pruebas, y la garantía de que los pueblos indígenas tengan voz en la elaboración y aplicación de los programas y políticas. El Plan de aplicación es uno de los aspectos de la labor en curso para cumplir con las metas de Cerrar la Brecha en favor de la infancia.

66. La consecución de la meta de 2008, de reducir a la mitad la disparidad en las tasas de mortalidad de los niños indígenas menores de 5 años dentro de 10 años (para 2018) no está bien encaminada. En 2017, la mortalidad de niños indígenas (164 muertes por cada 100.000 nacidos vivos) fue 2,4 veces mayor que la tasa de mortalidad de los niños no indígenas (68 muertes por cada 100.000 nacidos vivos). El 75 % del total de las muertes de niños indígenas en el período 2013-2017 se debió a tres causas principales: afecciones perinatales (47 %), “signos, síntomas y hallazgos clínicos y de laboratorio anormales no clasificados en otro lugar” (como el síndrome de muerte infantil súbita) (14 %), y afecciones congénitas y cromosómicas (14 %). Si bien los mayores índices de mortalidad infantil y de lactantes en los niños indígenas se sustentan en un complejo conjunto de factores, hay una serie de comportamientos relacionados con la salud materna y el embarazo, así como secuelas del parto, que parecen estar estrechamente vinculados con las tres causas principales de mortalidad de niños indígenas. Para reducir esos factores de riesgo, el Gobierno de Australia se concentra en mejorar el acceso a la atención de salud materna y vinculada con el embarazo que sea adecuada desde una perspectiva cultural, así como iniciativas más generales en materia de salud y bienestar. En los últimos años se han observado mejoras notables en los indicadores de salud materno-infantil. Sin embargo, persisten algunas diferencias sustanciales entre los resultados para las madres y los lactantes indígenas y no indígenas, lo que indica la necesidad de seguir tratando de mejorar.

67. En los párrafos 174 a 176 del informe combinado se abordan los graves riesgos y desventajas sociales que afectan a los hijos de personas recluidas. En las páginas 97 a 102 de los apéndices se consigna información sobre los programas para facilitar el contacto entre esas personas y sus hijos. El Gobierno de Australia se ha comprometido a abordar las cuestiones subyacentes que llevan a los padres y madres indígenas a lidiar con el sistema de justicia penal. El Gobierno tiene en cuenta, en particular, los riesgos que corren los niños indígenas cuando se encarcela a su madre u otras personas encargadas de su cuidado. El proyecto *Wiyi Yani U Thangani* (Voces de Mujeres) consiste en escuchar de boca de las mujeres y niñas indígenas recluidas cuáles son sus prioridades, desafíos y aspiraciones para sí mismas, sus familiares y su futuro. El informe final de la primera etapa de este proyecto contendrá probablemente la recomendación de trabajar con dirigentes y organizaciones de la comunidad a fin de definir un mejor enfoque para reducir la tasa de reclusión de mujeres indígenas. El Gobierno de Australia ha aportado 1,7 millones de dólares para apoyar la segunda etapa del proyecto, como parte del Cuarto Plan de Acción 2019-2022 del Plan Nacional para Reducir la Violencia.

68. En marzo de 2018, la Comisión de Reforma Legislativa de Australia completó un estudio sobre la tasa de reclusión de personas indígenas, titulada *Pathways to Justice* (Itinerarios hacia la justicia). La Comisión formuló una serie de recomendaciones para reducir esa tasa de reclusión, sobre cuestiones como la libertad bajo fianza, las condenas, el acceso a la justicia, la reinversión en la justicia y el vínculo entre las altas tasas de niños indígenas en el sistema de protección de la infancia y la reclusión de adultos. El Gobierno de Australia examina actualmente esas recomendaciones.

69. Los gobiernos de los estados y territorios han establecido medidas adicionales para abordar el número excesivo de personas indígenas en detención, y las consecuencias que conlleva para sus hijos. Por ejemplo, los Servicios Correccionales del Territorio de la Capital de Australia facilitan programas destinados a apoyar y fortalecer las relaciones con

los niños cuando los padres están en prisión, como *Story Time* (Tiempo de cuentos) y visitas privadas y ampliadas que permiten a los reclusos que reúnen determinados criterios la oportunidad de pasar tiempo con sus hijos sujetos a una escasa vigilancia. El gobierno de Australia Occidental otorga prioridad a reducir el número excesivo de ciudadanos indígenas detenidos, mediante un marco de programas y medidas encaminados a disminuir ese porcentaje en un 23 % para 2028-2029. El gobierno del Territorio del Norte está elaborando un Acuerdo de Justicia para Aborígenes, en colaboración con las comunidades indígenas, que tiene por objeto reducir las tasas de reincidencia y encarcelamiento.

70. En los párrafos 242 a 247 del informe combinado y en las páginas 142 a 144 y 157 a 165 de los apéndices figura información sobre la educación de los niños indígenas. En febrero de 2019, el Gobierno de Australia anunció un conjunto de medidas educativas por valor de 200 millones de dólares, destinado a garantizar a los jóvenes estudiantes indígenas el acceso a diversos itinerarios académicos de la enseñanza secundaria y a brindarles el apoyo necesario para participar en la educación.

71. La consecución de la meta de matricular al 95 % de los niños indígenas de 4 años en la educación preescolar para 2025 está bien encaminada. También lo está la meta de reducir a la mitad para 2020 la disparidad entre los estudiantes que finalizan del 12º curso o su equivalente. En cambio, no sucede lo mismo con las metas de reducir a la mitad para 2018 la disparidad en el aprendizaje de lectura y aritmética y en la asistencia a la escuela. Todos los gobiernos australianos se han comprometido a garantizar que los niños indígenas permanezcan en la escuela, obtengan buenos resultados y alcancen su pleno potencial a través de los itinerarios de la educación superior. Es esencial garantizar que las escuelas dispongan de un plan de estudios inclusivo desde el punto de vista cultural, y el Plan de Estudios de los Aborígenes sobre Historias y Culturas de los Pueblos Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres se ha fijado la prioridad interdisciplinaria de asegurar que todos los estudiantes puedan conocer la profundidad, riqueza y diversidad de los pueblos indígenas. El Proyecto Nacional de Planes de Estudios para Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres tiene por objeto capacitar a todo el personal docente para que integre las perspectivas de los pueblos indígenas en sus prácticas en el aula, en beneficio de todos los alumnos.

72. El Gobierno de Australia ha invertido 5,9 millones de dólares en el período de 2017-2018 a 2020-2021 para poner a prueba la iniciativa de Aprendizaje del Idioma Inglés para Niños Indígenas. Esta iniciativa tendrá como objetivo mejorar los resultados de la alfabetización en inglés para los niños indígenas en edad preescolar, para quienes ese idioma es una lengua o dialecto adicional, mediante el uso de aplicaciones interactivas basadas en el juego. La iniciativa está concebida y elaborada en consulta con las comunidades indígenas y se pondrá a prueba en establecimientos de enseñanza preescolar de 20 comunidades indígenas.

73. Muchas jurisdicciones cuentan con sus propios planes de educación para la población indígena. En diciembre de 2018, el gobierno de Australia Meridional puso en marcha la Estrategia de Educación para Aborígenes, 2019-2029, que tiene por objeto mejorar los resultados de los alumnos indígenas mediante la prestación de apoyo y la revisión de las prácticas docentes. La Estrategia se centra en la elaboración de un programa de estudios inclusivo desde el punto de vista cultural, que ofrezca a los niños la oportunidad de iniciarse en las lenguas indígenas, y propone la creación de “planes de aprendizaje individuales” para los estudiantes indígenas.

Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

74. En los párrafos 65 y 66 del informe combinado figura información sobre la edad mínima de responsabilidad penal. Los gobiernos australianos estudian la posibilidad de elevar la edad mínima de responsabilidad penal de Australia, en el marco de un grupo de trabajo del Consejo de la Fiscalía General, que deberá presentar su informe en noviembre de 2019.

75. Como se señala en el párrafo 160 del informe combinado, en la gran mayoría de los casos los estados y territorios tienen lugares de detención separados para los menores de

edad y los adultos. Australia acepta la obligación de separar a los niños de los adultos en prisión solo en la medida en que las autoridades responsables consideren que tal situación es factible y coherente con la obligación de permitir que los menores de edad puedan mantener contacto con sus familiares, teniendo en cuenta la geografía y la demografía de Australia. En virtud del artículo 33 de la nueva Ley de Derechos Humanos de 2019 (Queensland), un niño que esté detenido acusado de un delito, o un niño que esté detenido sin cargos, debe estar separado de los detenidos adultos. En la Parte II se ofrece más información sobre esta legislación.

76. Todas las jurisdicciones tienen una legislación que aborda específicamente los casos de delitos cometidos por una persona con una enfermedad mental. Los gobiernos australianos trabajan conjuntamente para mejorar el trato que el sistema de justicia penal dispensa a las personas con discapacidad cognitiva que no pueden asumir su defensa, ni pueden ser declaradas no culpables, por motivos de discapacidad mental, incluidos los niños. En 2019, varios gobiernos australianos aprobaron la *Declaración nacional de principios relativos a las personas que no pueden asumir su defensa, ni pueden ser declaradas no culpables, debido a un trastorno cognitivo o de salud mental*. Estos principios reconocen los derechos de las personas con trastornos cognitivos o de salud mental y tratan de identificar salvaguardas a lo largo del proceso judicial y los períodos en que una persona está sujeta a órdenes.

77. Aunque la legislación de los estados y territorios difiere ligeramente en su enfoque, cada jurisdicción cuenta con salvaguardas para garantizar que los niños que no están en condiciones de asumir su defensa solo puedan ser detenidos en circunstancias limitadas. Por ejemplo, los cambios legislativos propuestos en Australia Occidental fortalecerán las salvaguardas existentes para asegurar que, si se determina que un niño no está en condiciones de asumir su defensa, solo podrá ser detenido en caso de ser necesario para la protección de la comunidad. Dicha detención estará sujeta a una revisión periódica por un tribunal especializado con facultades para disponer la puesta en libertad. En Australia Meridional, la detención de un menor de edad no puede ser indefinida y solo se permite cuando no existen otras alternativas viables.

78. En los párrafos 159 a 169 del informe combinado y en la Parte II más adelante puede consultarse información sobre la justicia juvenil y la Comisión Real del Territorio del Norte. El 15 de diciembre de 2017, el Gobierno de Australia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se trata de un paso importante para mejorar la supervisión y las condiciones de los centros de detención en Australia, en particular cuando se trata de jóvenes, y refleja el empeño del Gobierno de Australia en prevenir la tortura y los malos tratos. En la Parte II se ofrece más información al respecto.

Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones

79. En los párrafos 302 a 307 del informe combinado y en las páginas 202 a 204 de los apéndices figura información sobre un mecanismo de coordinación para la aplicación del Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como para la recopilación de datos y la investigación. Además de la investigación que se menciona en el párrafo 307 del mencionado informe, como parte del Programa de investigación del Instituto Australiano de Criminología para la reducción del material relacionado con la explotación de niños se concedió 800.000 dólares para financiar ocho proyectos innovadores de investigación orientados a reducir la producción, visualización, distribución y almacenamiento de material relacionado con la explotación y el abuso de niños. En 2019, la Universidad del Sunshine Coast en Queensland estableció la Dependencia de Investigación y Prevención de la Violencia Sexual, que reúne a los principales especialistas para ayudar a prevenir y responder a la violencia sexual, en particular, la perpetrada contra niños. El gobierno de Nueva Gales del Sur ha fundado un centro de intercambio de información sobre víctimas de delitos, que incluye datos actualizados sobre la investigación y los ámbitos de práctica vinculados con cuestiones relativas a los niños y las víctimas de delitos de abusos sexuales. El Gobierno de Australia

ha establecido también el Centro Australiano para la Lucha contra la Explotación Infantil (véase más información en la Parte II)

80. En los párrafos 315 a 318 y 326 a 328 del informe combinado figura información sobre la legislación que prohíbe y tipifica como delito la venta de niños en las jurisdicciones australianas, y en las páginas 204 y 205 de los apéndices se encuentra disponible información sobre las medidas para prevenir la venta de niños. A nivel estatal, la Ley sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, de 2018 (Nueva Gales del Sur), en su etapa inicial, introducirá en la Ley de Delitos de 1900 (Nueva Gales del Sur) varios nuevos delitos relacionados con la esclavitud, la servidumbre y el trabajo infantil, el matrimonio forzado y otros delitos por tráfico de material relacionado con el abuso infantil con fines de cibersexo. También establecerá por ley la nueva Oficina del Comisionado contra la Esclavitud, que tendrá una serie de funciones. Entre ellas figuran identificar y prestar asistencia a las víctimas de formas contemporáneas de esclavitud en Nueva Gales del Sur, hacer un seguimiento de la eficacia de la legislación y las políticas para luchar contra la esclavitud y supervisar la presentación de informes sobre preocupaciones vinculadas con formas contemporáneas de esclavitud en las cadenas de suministro.

81. En los párrafos 319 a 321 del informe combinado y las páginas 206 y 207 de los apéndices puede consultarse información sobre la investigación y el enjuiciamiento de los delitos. En el período 2017-2018 se remitieron a la Policía Federal Australiana 162 nuevos casos de delitos relacionados con la trata y la explotación. En los párrafos 330 a 336 del informe combinado puede consultarse información sobre el apoyo a las víctimas de la trata de personas y la esclavitud.

82. Las personas identificadas como víctimas o presuntas víctimas de la trata de personas y delitos relacionados con la esclavitud pueden recibir apoyo en el marco del Programa de Apoyo a las Víctimas de la Trata. El Programa incluye la prestación de servicios para mejorar la salud física y mental y el bienestar de las víctimas, lo que incluye apoyo a la gestión de casos, alojamiento, atención médica y asesoramiento, asistencia social y remisión de casos a los servicios de asesoramiento jurídico y migración. En 2017, se remitieron al Programa de Apoyo los casos de ocho personas menores de 18 años. Los niños víctimas de la trata tienen derecho automáticamente a un mínimo de 90 días de apoyo incondicional. Las presuntas víctimas que colaboran en una investigación o un enjuiciamiento reciben apoyo constante hasta que se cierra el caso. Se concede a todos los beneficiarios que finalicen el programa un período de transición de 20 días, que puede ampliarse con un criterio caso por caso. Este enfoque está en consonancia con las normas internacionales y las orientaciones sobre mejores prácticas.

Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones

83. La propiedad, tenencia y uso de armas de fuego en Australia, en particular, la tenencia y utilización de armas de fuego por personas menores de edad, se rige por la legislación de los estados y los territorios. El Acuerdo Nacional sobre Armas de Fuego, en que se establece el enfoque nacional para regular la cuestión, dispone que las licencias de armas de fuego deben expedirse solo a personas mayores de 18 años. Sin embargo, el Acuerdo no es vinculante, y en algunas jurisdicciones se permite que personas menores de edad (de 12 a 18 años) soliciten un permiso restrictivo para la tenencia y utilización (aunque no la propiedad) de armas de fuego para determinados fines, con el consentimiento y la supervisión de un adulto responsable que tenga una licencia de armas de fuego.

84. El Gobierno de Australia contrata a empresas de seguridad privadas para proteger los intereses del país, por ejemplo, en los puestos diplomáticos de Australia en el extranjero y algunos centros de detención de inmigrantes e instalaciones militares. Todos los proveedores de servicios en Australia y en el extranjero están obligados a cumplir las leyes locales y las políticas del Gobierno de Australia. El cumplimiento de los contratos se supervisa mediante el requisito de presentación periódica de informes y un marco de gestión del desempeño. El incumplimiento podría dar lugar a la rescisión del contrato por parte del Gobierno de Australia.

85. En los párrafos 362 a 366 del informe combinado puede consultarse información sobre el apoyo prestado a los niños que han participado o pueden haber participado en conflictos armados.

86. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o el Departamento del Interior detecta a los niños que puedan haber participado en conflictos armados, en oportunidad de la presentación de la solicitud o en la entrevista cuando se considera su reasentamiento o la concesión de protección en Australia en el marco del Programa Humanitario. Los encargados de la adopción de decisiones sobre visados reciben orientación para identificar y evaluar las solicitudes de visado de los ex niños soldados, así como para definir las consideraciones que justifican la prestación de asistencia especializada para su rehabilitación, recuperación y reinserción en la comunidad. Entre las personas que llegan a Australia se identifica a las que necesitan asistencia y se pone a su disposición apoyo especializado para facilitar su asentamiento integrado, así como servicios de atención de salud.

87. El Gobierno de Australia ofrece servicios de apoyo a los migrantes y los refugiados que se asientan en Australia, para atender a sus necesidades específicas y fomentar su independencia y su participación en la comunidad. El Programa de Asentamiento Humanitario ayuda a las personas que han inmigrado por razones humanitarias a desarrollar las aptitudes y los conocimientos necesarios para convertirse en miembros activos y autosuficientes de la comunidad australiana. Los participantes en este programa reciben también apoyo en relación con sus necesidades de salud, mediante el acceso a Medicare.

88. El Programa de Asistencia a los Supervivientes de Torturas y Traumas presta servicios de apoyo especializado a los inmigrantes por razones humanitarias y reasentados con carácter permanente y a las personas con visados funcionales temporales que viven en la comunidad australiana y experimentan problemas psicológicos o psicosociales relacionados con el trauma sufrido antes de llegar a Australia. El Programa incluye asesoramiento y servicios conexos, actividades de desarrollo comunitario y fomento de la capacidad y servicios de divulgación para ayudar a las personas que viven en zonas de Australia rurales, regionales y apartadas. Los beneficiarios pueden ser remitidos a otros servicios a través de una amplia gama de fuentes, entre ellas el Programa de Asentamiento Humanitario.

89. El Gobierno de Australia también financia el Servicio de Apoyo de Transición para Jóvenes, que ofrece apoyo adicional a los jóvenes inmigrantes por razones humanitarias y a los migrantes vulnerables de 15 a 25 años de edad, para que puedan participar en la educación y el trabajo.

Parte II

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

90. Comisión Real sobre las Respuestas Institucionales a los Abusos Sexuales de Niños: en 2013 se estableció la Comisión Real sobre las Respuestas Institucionales a los Abusos Sexuales de Niños (la Comisión Real) para investigar de qué manera las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales han gestionado y respondido a las alegaciones y casos de abuso sexual infantil. El 15 de diciembre de 2017, la Comisión Real presentó su informe final, en el que formuló 409 recomendaciones para mejorar las leyes, las políticas y las prácticas con miras a prevenir y responder mejor al abuso sexual infantil en las instituciones. La Comisión es independiente del Gobierno y determina sus propios procedimientos. El informe final se publicó en www.childabuseroyalcommission.gov.au/final-report.

91. El 13 de junio de 2018, el Gobierno de Australia presentó al Parlamento su respuesta al informe final de la Comisión Real. De las 409 recomendaciones formuladas en el informe final, 84 se refieren a la reparación, que el Gobierno de Australia ha abordado mediante el establecimiento de un Plan Nacional de Reparaciones para las personas que han sido víctimas de abuso sexual infantil en instituciones. De las 325 recomendaciones

restantes, 122 se dirijan total o parcialmente al Gobierno de Australia. Este ha aceptado, o aceptado en principio, 104 de estas 122 recomendaciones. Las otras 18 recomendaciones dirigidas al Gobierno de Australia han recibido la mención “para estudio más detenido” o “se ha tomado nota”. La mayoría de ellas ya han sido objeto de un estudio más detenido y hay medidas en curso al respecto. La respuesta del Gobierno de Australia está publicada en: www.childabuseroyalcommissionresponse.gov.au/government-response.

92. El Gobierno de Australia se ha comprometido a garantizar una respuesta cuidadosa, exhaustiva y adecuada a la labor sustantiva de la Comisión Real. Un grupo de trabajo dependiente del Ministerio de Justicia coordina las medidas adoptadas acerca de las recomendaciones y el seguimiento de los progresos realizados por todos los gobiernos de Australia. El Gobierno de Australia presentará un informe anual sobre su aplicación hasta 2022. Ha aceptado asimismo la recomendación de la Comisión Real de que se lleve a cabo un examen decenal de la aplicación.

93. Plan Nacional de Reparaciones: en respuesta a las recomendaciones de la Comisión Real se estableció el Plan Nacional de Reparaciones para las personas que han sido víctimas de abuso sexual infantil (el Plan). Todos los gobiernos de Australia y muchas otras instituciones no gubernamentales se han adherido voluntariamente al Plan. Este entró en vigor el 1 de julio de 2018 y tendrá una duración de 10 años. Constituye un reconocimiento oficial de que muchos niños han sido víctimas de abusos sexuales en instituciones australianas. En el Plan se considera que esas instituciones deben rendir cuentas por las infracciones cometidas y se ayuda a las personas que sufrieron abusos sexuales a obtener asesoramiento y servicios psicológicos, una respuesta directa y personal y un pago. Los niños pueden acogerse a los beneficios del sistema si nacieron antes del 30 de junio de 2010, pero su solicitud no será examinada antes de que cumplan los 18 años de edad.

94. *Working with Children Checks: Information on the Child Abuse*: en el párrafo 156 del informe combinado se pone a disposición el informe de la Comisión Real relativo al control sobre el trabajo con niños, para detectar abusos. El Gobierno de Australia, en consulta con los gobiernos de los estados y territorios, elabora actualmente un conjunto de normas nacionales para el control sobre el trabajo con niños. Esas normas establecerán una referencia mínima para fiscalizar el trabajo con niños a nivel nacional. La aplicación de las normas nacionales por los estados y territorios se traducirá en una mayor uniformidad y coherencia de las normas para el control del trabajo con niños en todo el país y, a su vez, ofrecerá una mejor protección a los niños.

95. Aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: Australia ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura el 21 de diciembre de 2017 y ese instrumento entró en vigor en el país el 20 de enero de 2018. En el momento de la ratificación, Australia hizo una declaración en virtud del artículo 24 del Protocolo Facultativo, para pedir el aplazamiento de las obligaciones relacionadas con el Mecanismo Nacional de Prevención por un período de tres años, que comenzará en enero de 2021. Ese aplazamiento da al Gobierno de Australia tiempo para trabajar con los estados y territorios de Australia en el establecimiento de un Mecanismo Nacional de Prevención. Dado que se propone que cada gobierno conserve la autoridad para supervisar los centros de detención en su jurisdicción, el Mecanismo Nacional de Australia será una red cooperativa de inspectores de cada jurisdicción, y la Oficina del Defensor Federal del Pueblo desempeñará una función facilitadora de coordinación. El Reglamento sobre la Enmienda relativa al Defensor del Pueblo (Mecanismo Nacional de Prevención) de 2019 confiere formalmente al Defensor Federal del Pueblo el papel y las funciones de coordinador de ese Mecanismo.

96. Comisión Real del Territorio del Norte: la Comisión Real del Territorio del Norte examinó las mejoras que podrían introducirse en los sistemas de protección de la infancia y de detención de jóvenes en el Territorio del Norte, centrándose en los problemas sistémicos específicos identificados dentro de ese Territorio, la manera en que surgieron, las causas por las que no se identificaron y corrigieron y las reformas apropiadas. El 17 de noviembre de 2017, la Comisión Real publicó su informe final, que contenía 147 conclusiones y 227 recomendaciones, y en el que se esboza un programa de reforma a largo plazo de los sistemas de protección de la infancia y justicia juvenil en el Territorio del Norte. El gobierno del Territorio del Norte aceptó el propósito y la orientación de las 227 recomendaciones, y en abril de 2018 se comprometieron fondos adicionales a lo largo

de cinco años para aplicar las reformas establecidas en el Plan *Safe, Thriving and Connected: Generational Change for Children and Families* (Seguro, próspero y conectado: cambio generacional para niños y familias) a fin de apoyar mejor a los niños, los jóvenes y las familias en situación de vulnerabilidad (tema al que se hace referencia en el párrafo 12 de la lista de cuestiones)

97. El primer informe se publicó el 16 de noviembre de 2018. De las 218 recomendaciones relativas a la adopción de medidas por el gobierno del Territorio del Norte, 33 se cumplieron, 47 estaban bastante avanzadas, 122 estaban en curso y 16 todavía no se han puesto en curso. El 8 de febrero de 2018, el Gobierno de Australia publicó su respuesta al informe sobre las 28 recomendaciones por las que le incumbe la responsabilidad exclusiva o conjunta. En la Parte I se puede obtener más información relacionada con los párrafos 3 y 12 de la lista de cuestiones.

98. Proyecto de ley de enmienda sobre la atención y protección de la infancia de 2019 (Territorio del Norte): en 2019, el Gobierno del Territorio del Norte presentó el proyecto de ley de enmienda sobre la atención y protección de la infancia (2019), que aplica 12 recomendaciones de la Comisión Real del Territorio del Norte y complementa las inversiones para mejorar la práctica sobre el terreno y lograr mejores resultados para los niños. El proyecto de ley iba acompañado de una declaración de compatibilidad con los derechos humanos, en que se examinaba en qué medida las disposiciones del proyecto de ley afectaban a los derechos humanos, incluidos varios artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ejemplo, hay cambios específicos que reconocen e incorporan la necesidad de conexión con el país, la cultura y el idioma de los niños indígenas, de conformidad con el artículo 30. También hay disposiciones que ponen de relieve la necesidad de fortalecer, preservar y promover relaciones positivas entre el niño y su familia, de conformidad con el artículo 9.

99. Centro Australiano de Lucha contra la Explotación Infantil: en marzo de 2018, el Gobierno de Australia anunció la creación del Centro Australiano de Lucha contra la Explotación Infantil (ACCCE). Este Centro está dirigido por la Policía Federal Australiana y reúne a las principales partes interesadas y asociados para impulsar un esfuerzo colectivo de lucha contra la epidemia mundial de la explotación de niños. El ACCCE promueve una respuesta de colaboración y cohesión para contrarrestar la explotación infantil mediante la utilización de la pericia de los gobiernos, los organismos no gubernamentales y la industria privada. También facilita el intercambio de recursos, conocimientos y aptitudes entre los interesados. El Centro apoyará directamente la función de investigación de la Policía Federal y la policía de los estados y territorios.

100. Ley sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud, de 2018 (Ley Federal): en la Ley sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud, de 2018, que entró en vigor el 1 de enero de 2019, se solicita que algunas grandes empresas y otras entidades informen sobre sus iniciativas para evaluar y abordar los riesgos de las formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata de seres humanos, en sus cadenas de suministro y operaciones. La Ley define esas formas de esclavitud, que incluyen ocho tipos de explotación grave: la trata de personas, la esclavitud, la servidumbre, el matrimonio forzoso, el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, las peores formas de trabajo infantil y la contratación engañosa con fines de trabajo o servicios.

101. Ley de Derechos Humanos, de 2019 (Queensland): el 27 de febrero de 2019 el Parlamento de Queensland aprobó la Ley de Derechos Humanos de 2019 (Queensland). En virtud de esa Ley se protegen 23 derechos humanos, se obliga a los servicios públicos a respetar los derechos humanos, y se exige al Parlamento de Queensland que tenga en cuenta los derechos humanos cuando apruebe una legislación. Entre las disposiciones principales figura el artículo 26, que protege a la familia como unidad fundamental de la sociedad; el derecho de todos los niños, sin discriminación, a la protección que necesitan y que redunde en su interés superior, por ser niño; y el derecho a un nombre y a que se inscriba su nacimiento en el registro, en virtud de una ley del Estado, tan pronto como sea posible tras el nacimiento. El artículo 33 dispone que los niños acusados de un delito que estén detenidos, o los niños que estén detenidos sin cargos, deben estar separados de todos los detenidos adultos; un niño acusado debe ser juzgado lo más rápidamente posible; y un niño

que haya sido declarado culpable de un delito debe ser tratado de una manera que sea apropiada para su edad.

102. La Comisión de Lucha contra la Discriminación de Queensland pasará a denominarse Comisión de Derechos Humanos de Queensland y seguirá desempeñando sus funciones de tramitación de denuncias, educación y capacitación con arreglo a la Ley de Lucha contra la Discriminación de 1991 (Queensland), además de trabajar para resolver las denuncias en materia de derechos humanos y atender a las necesidades de suministro de información, educación y capacitación sobre la Ley de Derechos Humanos.

103. Departamento de Justicia Juvenil (Queensland): el 30 de abril de 2019, el gobierno de Queensland anunció una inversión sin precedentes en el sistema de justicia penal de menores de Queensland. El gobierno dedicará más de 320 millones de dólares a una amplia gama de iniciativas en todo el estado para reducir la reincidencia, y para ampliar o construir nuevos centros de detención para jóvenes, y dotarlos de personal. Esta inversión adicional se complementa con la creación de un nuevo Departamento de Justicia Juvenil, operacional a partir del 20 de mayo de 2019, con un enfoque centrado en la promoción de una serie de reformas.
